

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: MIGUEL ÁNGEL VANEGAS VANEGAS
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-018-2021-00341-01
RADICADO INTERNO	: 320-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 344

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación y del grado jurisdiccional de consulta, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa, a la luz de las sentencias SU 442 de 2016 y SU 559 de 2019; al pago del retroactivo pensional desde el 24 de noviembre de 2009, junto con las mesadas adicionales de cada anualidad; al pago de los intereses moratorios; a la indexación; y se condene en costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que, el demandante nació el 4 de octubre de 1955; cotizó al ISS desde el 1º de febrero de 1980; a la vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 350 semanas cotizadas; Medicina Laboral del ISS emitió dictamen el 20 de enero de 2010, en el que determinó una pérdida de la capacidad laboral del 60.35% de origen común, estructurada el 24 de noviembre de 2009. El 17 de febrero de 2010 solicitó la pensión de invalidez y

en resolución 22.031 de 2010 la entidad accionada negó la prestación económica por no contar con las 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración; el 12 de enero de 2011, se solicitó la indemnización sustitutiva, la cual fue reconocida en la resolución 1668 de 2012; el 3 de noviembre de 2020 nuevamente fue solicitada la pensión de invalidez, pero en aplicación de la condición más beneficiosa.

Asegura que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa, por tener más de 300 semanas cotizadas a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%; que el actor es una persona de la tercera edad y al momento de presentar la demanda cuenta con 65 años de edad y persiste con la enfermedad que le produjo la invalidez, que corresponde a insuficiencia venosa crónica; debido a su enfermedad el actor no labora desde el año 2007, siendo su único ingreso, el subsidio otorgado por Colombia Mayor.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La accionada en su contestación aceptó la fecha de nacimiento del demandante; la expedición de la resolución 22.031 de 2010 donde se estableció que el demandante cotizó 806 semanas hasta la fecha de estructuración, de las cuales 16 semanas se cotizaron en los 3 años anteriores al 24 de noviembre de 2009; la solicitud de la indemnización sustitutiva; el derecho de petición elevado el 3 de noviembre de 2020. Dijo que no es cierto que tenga derecho a la pensión de invalidez en aplicación del Decreto 758 de 1990 porque no es aplicable a la luz de la sentencia SL 2358 de 2017 y al demandante le fue reconocida la indemnización sustitutiva en resolución 1668 de 2012 en cuantía de \$12.666.158, siendo una situación consolidada. No le consta los demás hechos de la demanda.

Se opuso a las demás pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez por condición más beneficiosa; prescripción; improcedencia de intereses de mora; buena fe de la entidad demandada; compensación indexada; imposibilidad de condena en costas; improcedencia de la indexación (expediente digital 08).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 12 de septiembre de 2023, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a Colpensiones a reconocer al demandante

la pensión de invalidez, cuyo retroactivo se genera desde el 20 de agosto de 2018; condenó a reconocer y pagar al actor la suma de \$65.182.813 a título de retroactivo pensional causado entre el 20 de agosto de 2018 hasta el 31 de agosto de 2023, suma que deberá ser indexada al momento del pago. A partir del 1º de septiembre, se continuará reconociendo la pensión de invalidez al actor, a razón de 14 mesadas anuales y en el equivalente a un salario mínimo legal, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar y mientras subsistan las causas que la originaron. Del retroactivo pensional autorizó efectuar los descuentos en salud a que haya lugar.

ABSOLVIÓ a Colpensiones de las restantes pretensiones incoadas en su contra. DECLARÓ probada la excepción de improcedencia de los intereses de mora, y parcialmente probadas las de prescripción y compensación, autorizando a Colpensiones a descontar del valor que se genere como retroactivo la suma cancelada por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de vejez cancelada debidamente indexada. Condenó en costas a la parte demandada.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte accionada no comparte el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues se estableció por el despacho que el accionante hace parte de un grupo especial de protección y ello lo justificó porque los testigos José Gildardo y José Fernando Gómez, dijeron que el actor recibe el subsidio, lo cual no lo considera como prueba suficiente; que pese a que exista prueba, que el actor es beneficiario del sisben en nivel 1, tampoco lo considera como prueba que el primer filtro haya sido realizado por el Estado.

En relación al actuar diligente del actor, considera que tampoco fue acreditado, dado que la pensión de invalidez fue solicitada casi 12 años después, el 3 de noviembre de 2020, y en esa reclamación no se puso en conocimiento de Colpensiones la favorabilidad que se pretende probar en este proceso mediante los testimonios, por lo que Colpensiones no tuvo la oportunidad de conocer esas pruebas en el momento que la reclamación administrativa.

En caso de ser confirmada la sentencia, solicita que frente al retroactivo pensional y el disfrute de las mesadas pensionales, sea limitada en los términos de la sentencia T 436 de 2022 en donde se indicó que las mesadas pensionales se conceden a la fecha en que se radicó la acción de tutela en

virtud de la sentencia SU 556 de 2019, porque la condición relevante para el reconocimiento de la prestación es la situación de vulnerabilidad del accionante; que ese es el argumento para el reconocimiento de la pensión, el retroactivo pensional no se debe reconocer desde el 20 de agosto de 2018 (fecha de 3 años anteriores a la radicación de la demanda), sino a corte del 20 de agosto de 2021 (fecha para la cual se radicó la demanda) y sea revocada la condena en costas, dado que la reclamación administrativa efectuada el 3 de noviembre de 2020 solo se aportó el poder, copias de la cédulas y tarjeta profesional, sin que la accionada haya tenido conocimiento de esas condiciones de especial protección manifestadas por el actor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación: i) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa; ii) En caso de tener de derecho a la pensión de invalidez, determinar si el retroactivo pensional se debe reconocer desde el 20 de agosto de 2021; iii) Si hay lugar a revocar las costas procesales.

En el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar el valor del retroactivo pensional reconocido; y si hay lugar a la indexación de la condena impuesta.

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que el demandante nació el 4 de octubre de 1955 (fl. 52 del expediente digital 02); cotizó a Colpensiones desde el 1º de febrero de 1980 al 31 de marzo de 2007 un total de 812.43 semanas, según la historia laboral del expediente digital 08; el actor fue calificado el ISS el 20 de enero de 2010, el cual determinó una pérdida de la capacidad laboral del **60.53% estructurada el 24 de noviembre de 2009** (fls. 15 a 16 del expediente digital 02).

El demandante solicitó pensión de invalidez el 17 de febrero de 2010, la cual fue negada en resolución 22.031 de 2010 (fls. 49 a 50); solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez el 12 de enero de 2011 y en resolución 1668 de 2012 la entidad accedió a su reconocimiento en la suma

de \$12.666.158, teniendo en cuenta para su liquidación 806 semanas, y un IBL de 773.818 (fls. 25 a 27); el 3 de noviembre de 2020 solicitó a Colpensiones expediente administrativo, historia laboral y la pensión de invalidez aplicación la condición más beneficiosa según reposa en el fl. 17 del expediente digital 02 y en el expediente administrativo 09.

Y en la etapa de decreto de pruebas, el Juzgado decretó como prueba dictamen pericial para determinar el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del actor, fecha de estructuración y origen, según reposa en el expediente digital 15. Y en dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se determinó una pérdida de la capacidad laboral del **56.70% estructurada el 23 de octubre de 2009** (expediente digital 20)

Visto lo anterior, se resolverá el recurso de apelación de la siguiente manera:

1. De la pensión de invalidez

En primera instancia se condenó al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa. Teniendo en cuenta para dicha decisión el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde se determinó una pérdida de la capacidad laboral del **56.70% estructurada el 23 de octubre de 2009**, por ser el que define la situación del actor. Consideró que no cumple con las 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, sin embargo, dio aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional, dando aplicación al test de procedencia de la sentencia SU 556 de 2019.

Al respecto consideró, que el actor cumple el primer presupuesto, porque según lo manifestado por los testigos el actor presenta pobreza extrema, vive con dos hermanas y subsisten en virtud a los subsidios otorgados por el estado que ascienden a \$80.000; consideró la A Quo, que existe un primer filtro y que corresponden al realizado por el Estado a efectos de ser considerados en pobreza extrema y por ello son beneficiarios de los subsidios; y de la historia clínica extrajo que el demandante pertenece al régimen subsidiado. En relación al segundo requisito, lo consideró acreditado porque de la historia laboral del actor se infiere que el actor solo realizó cotizaciones hasta 16 de marzo de 2007 e interpuso acción de tutela solicitando la protección del derecho al mínimo vital, y en la historia clínica reposa que es beneficiario del régimen subsidiado 1; y los testigos (sobrino y vecino del demandante) declararon que el actor y sus hermanas viven de la caridad y de

los subsidios del Estado que recibe el demandante y sus dos hermanas y un sobrino le colabora con \$50.000 cada 2 o 3 meses. La imposibilidad de seguir cotizando consideró demostrada con los certificados médicos y ello fue corroborado por los testigos. El actuar diligente para solicitar la pensión igualmente lo encontró probado por haber reclamado la pensión de invalidez y en resolución de Colpensiones se extrae que la pensión de invalidez la reclamó el 17 de febrero de 2010, y la solicitud de la pensión de invalidez con aplicación de la condición más beneficiosa la solicitó el 3 de noviembre de 2020.

Verificado lo anterior, al analizar los requisitos del Decreto 758 de 1990, encontró que cumple con las 300 semanas en cualquier tiempo, ello es, a la vigencia de la Ley 100 de 1993; que para esa fecha contaba con 356,56 semanas.

Analizado el plenario, está probado en el proceso que el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas tiene una pérdida de la capacidad laboral del 60.35% y dicha pérdida de la capacidad laboral del demandante se estructuró el 24 de noviembre de 2009 según dictamen emitido por el ISS y que continuó siendo demostrada con el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde se determinó una pérdida de la capacidad laboral del **56.70% estructurada el 23 de octubre de 2009** (expediente digital 20), lo que implica que la norma aplicable es la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, semanas que no fueron acreditadas, en tanto que en el reporte de semanas cotizadas, allegadas en la historia laboral aportadas en la demanda y en el expediente administrativo, **se evidencian 141 días que corresponden a 20,14 semanas cotizadas entre el 23 de octubre de 2006 al 23 de octubre de 2009**, por lo tanto no se acredita las semanas exigidas en dicha normatividad.

En este orden de ideas, teniendo como pilar fundamental la aplicación de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 53 y 48 dispone el principio de la condición más beneficiosa, al igual que lo hace el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y algunas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, la sentencia 38.674 de 2012, es posible analizar si la parte accionante cumple con los requisitos de la normatividad anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, ello es, la Ley 100 de 1993 la cual resulta ser más benéfica, y en la que se exige 26 semanas al momento de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, si el afiliado estaba cotizando al régimen, **o si**

el afiliado no estaba cotizando al sistema debe acreditar: 1º) 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez, y 2º) 26 semanas en el año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, al 26 de diciembre de 2003 (siendo este último el requisito que debe ser analizado) y frente al cual se debe de decir:

- En el año anterior a la fecha de la estructuración, ello es, **del 23 de octubre de 2008 al 23 de octubre de 2009 no contaba con semanas cotizadas**, por haber cotizado hasta el **16 de marzo de 2007** (fl. 48 del expediente digital 08).
- Entre el **26 de diciembre de 2002 al 26 de diciembre de 2003** conforme la exigencia de la sentencia 38.674 de 2012, y que es corroborada en las sentencias SL 7275, SL 7205 y SL 6362 de 2015 o la SL 9762 de 2016, cuenta con 37.71 semanas cotizadas (fl. 47).

Ahora, frente al salto normativo por condición más beneficiosa de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que al momento de analizar la condición más beneficiosa se “*deberá aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada.*”, y este tema ha sido tratado por la Corte Constitucional en las sentencias T-584 de 2011, T-228 de 2014, T-401 de 2015 y **T-464 de 2016**, en donde la última de ellas señaló:

“... para esta Corporación, el principio de condición más beneficiosa permite aplicar el Acuerdo 049/90 cuando se prueba que el causante ha cumplido con el número de semanas exigidas por la mencionada norma jurídica durante el término de su vigencia, pese a que la muerte hubiese ocurrido con posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. (...)”

Pero más recientemente la **sentencia SU 442 de 2016** se concluyó:

*“... En efecto, según la Ley 860 de 2003 es posible pensionar por invalidez a quien reúne 50 semanas de aportes en la historia laboral, siempre que los aportes se hayan efectuado en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Es factible entonces adquirir una pensión de invalidez sin contar con más semanas de cotización al sistema general de pensiones. En contraste, admitir una aplicación del principio de la condición más beneficiosa que **permita estudiar el reconocimiento de la pensión de invalidez con base en el Decreto 758 de 1990, implica necesariamente –en casos como este- que ha de haber reunido por lo menos 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.** Es decir, que la posición de la jurisprudencia constitucional no es indiferente al estándar de sostenibilidad financiera contemplado en la regulación vigente o en la Ley 100 de 1993 –original-*

(...)

*Con fundamento en las anteriores razones, en concepto de la Sala Plena de la Corte, **el principio de la condición más beneficiosa no se restringe***

exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima (...)

Posición que es plenamente acogida por esta Sala, con el fin de garantizar el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de los afiliados que logre acreditar la condición de beneficiaria del Decreto 798 de 1990.

Sin embargo, previo a realizar el análisis de los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990, se hace necesario analizar lo consagrado en la sentencia SU 556 de 2019, en donde la Corte Constitucional acepta que se realice el salto normativo de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, en los eventos en que la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad, lo cual se logra determinar una vez satisfaga el test de procedencia. Lo que hace necesario que se analice en el presente evento si el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas cumple a cabalidad con cada uno de los presupuestos que a saber son los siguientes:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez ¹ , pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
Segunda condición	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la estructuración de la invalidez.
Cuarta condición	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Condición primera: Teniendo en cuenta que, en la copia de la cédula de ciudadanía, reposa que el afiliado nació el 4 de octubre de 1955 (fl. 52 del expediente digital 02), ello implica que a la fecha cuenta con 68 años de edad, lo cual lo hace que no se discuta el requisito de vejez. Considerando la Sala a diferencia de lo indicado por la A Quo, la vejez se puede contabilizar a partir de los 60 años, en vista que en la página web del Gobierno Nacional

¹ Esta se acredita con una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

[https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-](https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx)

[social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx](https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx), actualizada al 26 de octubre de 2023, reseña que el adulto mayor es la persona que cuenta con 60 años de edad o más. Al respecto indicó: “¿Quiénes son las personas mayores? Las personas mayores son sujetos de derecho y de especial protección constitucional, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia, su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. **Generalmente, una persona mayor es una persona de 60 años de edad o más.**” (Resalto de la Sala).

Aunado a lo anterior, el actor también pertenece al grupo de pobreza extrema, teniendo en cuenta que en la historia clínica del Hospital San Pio X, del 3 de enero de 2017 reposa que el demandante hace parte del subsidio 1, calidad de beneficiario del sistema subsidiado de salud, que perdura en el tiempo y se encuentra reflejado en las historias laborales del 9 de julio de 2020, 26 de agosto de 2020. De igual forma, el grado de pobreza en que vive el actor se logró demostrar con el testigo José Gildardo Monsalve (vecino del demandante) quien aseveró que el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas es pobre y vive con dos hermanas una de 71 años y 73 años; el demandante trabajó hasta el año 2008, 2009 o 2010 y dejó de trabajar por la enfermedad; el demandante y sus hermanas viven de un subsidio que el gobierno les da de \$80.000, con eso pagan servicios, la hermana mayor sale un día a la semana que le dan trabajo para ajustar y la otra hermana sale todos los días a la legumbrería a ver que le dan para ajustar a la comida; tiene un sobrino que también es pobre, pero este le colabora con \$40.000 o \$50.000 cada 2 o 3 meses; el demandante no tiene hijos y una de las hermanas tiene un hijo que es pobre; las hermanas del demandante no son pensionadas ni tienen renta; la casa donde vive el demandante es de bareque, no tiene lujos, solo las camas y donde comer; sabe que el demandante recibe el subsidio y que hay un sobrino que le colabora porque el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas le dice.

El testigo José Fernando Gómez Vanegas (sobrino del demandante), concuerda con lo manifestado por el testigo anterior, y adicionó que el demandante y las dos hermanas viven de limosna y la situación de ellos es precaria; que el demandante dejó de cotizar en el 2008 o 2009 y no pudo volver a laborar; que no siguió cotizando por la enfermedad que tenía en el pie porque

él se desempeñaba como Ranchero en el campo de redes eléctricas; expuso que los Rancheros tenía que levantarse a las 2am para despachar a 150 o 200 empleados, darles desayuno y almuerzo, debía hacer la comida para cuando ellos llegaran y se acostaba a las 8 o 9pm, pero él con sus pies enfermos no podía laborar; que el demandante era el que veía por su madre mientras él estaba laborando, no tuvo hijos y el testigo no le conoció esposa.

Pruebas con las que queda completamente sustentado, la condición de pobreza extrema en que vive el demandante, pues contrario a lo manifestado en el recurso de apelación, la parte actora suplió a cabalidad la carta probatoria de demostrar, que es beneficiario del sisben 1 conforme reposa en las historias laborales y con las declaraciones de los testigos, se logra corroborar que el demandante no cuenta con trabajo, ingresos o rentas con las que pueda tener una vida digna acorde al mínimo vital; que vive de la caridad de la gente; que su vivienda no cuenta con lujos; que la alimentación es precaria y la deriva de lo que a su hermana le regalan en el pueblo. Y por el contrario, no existió por parte de Colpensiones ninguna actividad tendiente a desvirtuar lo dicho por los testigos o lo registrado en la historia laboral del actor.

Condición segunda: En cuanto a este requisito, también se encuentra acreditado, pues conforme lo expuesto por los testigos, el demandante no cuenta con ingresos para tener una vida digna, toda vez que su sustento deviene del subsidio del estado por valor de \$80.000, del día de trabajo semanal que obtiene su hermana de 73 años y de las donaciones que recibe la hermana de 71 años de legumbres y huesos.

En miras de lo anterior, se genera convicción a la Sala, que el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas sin el reconocimiento de la pensión de invalidez afecta sus necesidades básicas indiscutiblemente.

Tercera condición: En lo que tiene que ver con los argumentos razonables para justificar la imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez, ello es para el **23 de octubre de 2009**, del análisis del dictamen pericial y la historia clínica en su conjunto, se encuentra plenamente acreditado que el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas presenta una ulcera crónica a nivel del miembro inferior izquierdo desde hace 25 años, hace 20 años le realizaron injerto sin que pegara; y en dicho dictamen se determinó como diagnóstico “insuficiencia venosa profunda con ulcera crónica gigante MII”, determinándose una pérdida de la capacidad laboral del 56.70% (fls. 15 y 16 del expediente digital 02);

siendo la historia clínica del 9 de julio de 2020 explicita al señalar “Certifico que el señor Miguel Ángel Vanegas presenta discapacidad funcional ulcerativa varicosa en el tercio distal de la pierna izquierda, ocupa la circunferencia total de la pierna con fondo sucio con escaso tejido de granulación, con bordes esclero atróficos, con aspecto elefantíásico con dermatitis ocre pigmentario, mal oliente varice grado IV antecedente de injerto de piel con área donante del muslo izquierdo dificultad moderada a la marcha el cual no puede realizar actividades laborales” (fl. 148 del expediente digital 02).

Cuarta condición: Por último, considera la Sala que existió una actuar diligente, en vista que la calificación del ISS fue del 20 de enero de 2010 (fls. 15 del expediente digital 02); solicitó pensión de invalidez el 17 de febrero de 2010, la cual fue negada en resolución 22.031 de 2010 (fls. 49 a 50); solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez el 12 de enero de 2011 y en resolución 1668 de 2012 fue reconocida (fls. 25 a 27); el 3 de noviembre de 2020 solicitó a Colpensiones expediente administrativo, historia laboral y la pensión de invalidez aplicación la condición más beneficiosa según reposa en el fl. 17 del expediente digital 02.

Así la cosas, del análisis de la prueba documental que reposa en el plenario, se evidencia que el Sr. Miguel Ángel Vanegas Vanegas cumple a cabalidad con el test de procedencia, por lo que es viable que se analizaran los requisitos del Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa, los cuales cumple a cabalidad toda vez que desde el 1º de febrero de 1980 al 25 de noviembre de 199, ello es, con anterioridad al 1º de abril de 1993, tenía cotizadas **334.58 semanas** superando con creces, las 300 semanas exigidas al 1º de abril de 1994 (fl. 43 del expediente digital 08).

De conformidad con lo analizado, se CONFIRMARÁ el reconocimiento de la pensión de invalidez.

2. En relación al retroactivo pensional

La A Quo condenó al pago de \$65.182.813 por retroactivo pensional causado entre el 20 de agosto de 2018 hasta el 31 de agosto de 2023, dando aplicación a la excepción de prescripción

Decisión que será CONFIRMADA, teniendo en cuenta que el actor fue calificado por el ISS el 20 de enero de 2010; conforme se extrae de la

resolución 22.031 de 2010, el actor solicitó pensión de invalidez el 17 de febrero de 2010, la cual fue negada (fls. 49 a 50 y 123 a 124), reclamación con la que interrumpió la prescripción, y al ser negada, contaba con 3 años para presentar demanda ordinaria laboral, la cual interpuso el 20 de agosto de 2021 según el acta de reparto que reposa en el expediente digital 01. En ese sentido, al contabilizar los 3 años anteriores a la presentación de la demanda en virtud de lo establecido en los arts. 489 CST y 151 del CPT y SS, genera que se encuentren prescritas las mesadas pensionales anteriores al 20 de agosto de 2018 como se indicó en primera instancia.

Ahora, no se acoge la solicitud elevada por el apoderado de Colpensiones, de reconocer la pensión desde el 20 de agosto de 2021 (fecha de la presentación de la demanda) en aplicación de la sentencia T 436 de 2022 en donde se indicó *“111. Sobre el particular, la Sala aclara que, de acuerdo con la regla jurisprudencial vigente fijada en la Sentencia SU-556 de 2019, dado que la condición relevante para efectos del reconocimiento de la prestación en virtud de la condición más beneficiosa es la situación actual de vulnerabilidad del accionante, la presente sentencia tiene un efecto declarativo del derecho, razón por la que solo es posible ordenar el pago de mesadas pensionales a partir de la presentación de la acción de tutela, esto es, el 17 de noviembre de 2020. En consecuencia, las demás reclamaciones derivadas de la prestación –tales como retroactivos, intereses e indexaciones– deben ser resueltas por el juez ordinario laboral. En consecuencia, la Sala devolverá el expediente al Tribunal Superior de Bogotá para que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncie sobre las reclamaciones derivadas del reconocimiento de la pensión de invalidez, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en esta providencia.(...)”*, en primer lugar, porque la jurisprudencia en mención corresponde a una sentencia de tutela la cual tiene efectos interpartes, y segundo lugar porque claramente la sentencia aducida señala que el retroactivo pensional debe ser resuelto por la justicia ordinaria, y esta Sala es de la posición, que el retroactivo pensional debe ser reconocido en este evento, desde el 20 de agosto de 2018, por corresponder a los 3 años anteriores a la presentación de la demanda en aplicación del fenómeno de la prescripción.

Así mismo se confirmará el reconocimiento de las 14 mesadas pensionales, teniendo en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 establece *“Parágrafo transitorio 6. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del*

31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año", y en este evento el demandante causó el derecho pensional 23 de octubre de 2009, que corresponde a la fecha de estructuración indicada en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y el actor tiene derecho a una mesada pensional de un salario mínimo legal.

Al revisar la liquidación realizada en primera instancia, a la Sala le da un valor levemente superior al reconocido en primera instancia, diferencia que radica en que el despacho reconoció 5.3 mesadas para el año 2018 y a la Sala le dan 5.63 mesadas, no obstante, no se procederá a modificar la decisión de primera instancia por ser analizado este punto en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

El retroactivo pensional se deberá reconocer indexado conforme se indicó en la sentencia de primera instancia, porque la parte accionante no tiene por qué soportar la responsabilidad de asumir la carga moratoria, toda vez que el capital adeudado ha sido afectado por la devaluación de la moneda, de ahí que conforme al artículo 180 del CGP, y sin que haya lugar a negarse la indexación porque solo procede cuando la condena no tiene elemento de actualización legal, dado que la inflación es un hecho notorio, de público conocimiento, que trasciende en los campos económico, social y jurídico, en tanto ella incide en el signo monetario de curso legal y produce un desequilibrio en la relación deudor-acreedor, al punto que mientras el patrimonio del deudor no sufre mengua, el del acreedor se deteriora más o menos considerablemente.

3. De las costas procesales en primera instancia

Se CONFIRMARÁ la condena en costas, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: "1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...", y en este evento, las pretensiones de reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa e indexación fueron reconocidas a la parte accionante.

Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS

Salva voto



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ
Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto que debe imperar en este tipo de asuntos, me aparto de la decisión tomada por la Sala en segunda instancia al resolver dentro de proceso ordinario laboral promovido por MIGUEL ÁNGEL VANEGAS VANEGAS, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Para el efecto, se encuentra que la decisión mayoritaria se fundamentó en la posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, aun cuando la situación se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003, y se aplicaron las previsiones del Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, con fundamento en la aplicación del test de procedencia descrito en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU556-2019.

Aun cuando se es conocedor del contenido de la referida providencia, realmente se estima necesario apartarse de ella, ante la imposibilidad de efectuar una aplicación plus ultractiva de la norma, hasta hallar la disposición que satisfaga las exigencias para conceder el derecho.

Respecto del principio de la condición más beneficiosa ha habido diferentes líneas jurisprudenciales, verificándose cambios en su aplicación a lo largo del tiempo, por los máximos órganos de la jurisdicción laboral y constitucional, no obstante, a la fecha en las corporaciones han encontrado puntos de encuentro que facilitan el análisis de su aplicación en casos como el que ahora se analiza.

Es así que la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral a través de su jurisprudencia ha acogido la protección constitucional de la condición más beneficiosa, con la finalidad de salvaguardar una “expectativa” que surge con el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos por la ley inmediatamente anterior, ante un tránsito legislativo que no ha dispuesto un

régimen de transición, buscándose la protección de las personas que aunque no contaban con un derecho adquirido al momento del tránsito legislativo, si tenían una expectativa legítima, generada por una situación jurídica concreta al reunir la densidad de semanas que exigía la norma derogada para acceder a la prestación. En este sentido, ha destacado como características: «(i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de cambio normativo, y (iii) permite la aplicación de la disposición inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aportó la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional» (Sentencia CSJ SL184-2021).

La protección de esa expectativa legítima, se determinó por la Corte Suprema de Justicia que debe tener un límite temporal, lo que llamó una especie de puente de amparo construido temporalmente para que transiten entre la anterior y la nueva ley las personas que tienen una situación jurídica concreta, que es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia, sin que sea procedente, la aplicación de cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez la nueva disposición, siempre que el asegurado estuviera amparado por la misma, pues se recuerda que lo que se protege es la expectativa legítima de acceder a esa disposición normativa (Sentencia CSJ SL2843-2021).

Ahora bien, la sentencia CSL SL3664-2020 expuso la doctrina sobre el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, allí se sostuvo la posibilidad de aplicar las prerrogativas del régimen anterior más favorable a quienes se les declaraba la invalidez bajo la vigencia de la Ley 860 de 2003 esto es lo contemplado en la Ley 100 de 1993, aclarando el órgano de cierre de la justicia ordinaria laboral en dicha providencia, que ello solo procede cuando al momento de entrada en vigencia de la nueva normativa, el trabajador hubiese cumplido con las exigencias de la norma ya derogada, así:

[...] que para quienes hubieran dejado de cotizar al sistema, cuenten con 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el estado de invalidez y, en segundo término, es menester que también registren un mínimo de 26 semanas de aportes en el último año a la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que comenzó a regir el 29 de diciembre de 2003 según el Diario Oficial No. 45.415.

Lo anterior fue reiterado, precisado y limitado por la Sala, para el caso de la pensión de invalidez, en la sentencia CSJ SL2358-2017, y

recientemente en otras, como las providencias CSJ SL2796-2020, CSJ SL3102-2020 y CSJ SL3055-2020, que han mantenido el criterio sin variación. En la primera mencionada se precisó:

3. Recapitulación

Recapitulando, se debe conceder la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos:

3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

- a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando.
- b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.
- c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
- d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y
- e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.

Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

- a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.
- b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002.
- c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
- d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y
- e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez.

4. Combinación permisible de las situaciones anteriores

A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:

4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando

La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado.

Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.

4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó estaba cotizando

Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002.

Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente será beneficiario de la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa. La sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este último supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio.

En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta.

Es de anotar igualmente, que la posibilidad de apartarse de una decisión jurisdiccional como la que sirvió de soporte para la decisión a la que arribó la Sala, es abordada en la sentencia CSJ SL184-2021, al señalar:

Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de transparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido

a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.

Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL1592-2020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020, CSJ SL1938-2020, CSJ SL2547-2020 y CSJ SL3314-2020).

Por otra parte, debe advertirse que la financiación de todo sistema pensional depende de variables demográficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o potenciar algunos de ellos, por ejemplo, darle mayor peso a la permanencia en la afiliación para la adquisición de un derecho pensional que a la sola acreditación de un número específico de semanas.

En consecuencia, la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha

diseñado el sistema de pensional y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago.

En síntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

Por ello, de manera reiterada y pacífica esta Corporación ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensión de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen histórico de las leyes anteriores a fin de determinar la que más convenga a cada caso en particular.

Planteadas las posiciones que existen en torno al principio de la condición más beneficiosa, cuya presencia dentro del ordenamiento jurídico resulta innegable, por lo menos a partir de la Constitución Política de 1991, debe precisarse que se comparte la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en la medida que se entiende necesario que el principio de la condición más beneficiosa encuentre un límite temporal, puesto que si se ha planteado como un remedio ante las consecuencias que representa no contar con un régimen de transición en materia de pensión de invalidez, resulta entendible y apropiado que tal como ocurre con la transición establecida para pensión de vejez, se presente tal condición.

Es que de lo contrario, se llegaría al punto de establecer una nueva regla en materia de pensión de invalidez, consistente en que las personas que con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, hubieren cotizado al extinto ISS cuando menos 300 semanas, habrán dejado causado el derecho a la prestación siempre que se les llegue a calificar con una pérdida de capacidad laboral de al menos el 50%.

Lo anterior se sostiene, en la medida que según lo ha definido la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, se acude al principio de la condición más beneficiosa, con el fin de proteger unas expectativas legítimas, en aras de que un cambio normativo abrupto no cercene la posibilidad de acceder a un derecho pensional, cuando en vigencia de la norma derogada se cumplieron las exigencias fácticas que ella presentaba, no estableciendo en consecuencia un

derecho a que estas consecuencias se mantengan indefinidamente en el tiempo.

Y es que si mediante este principio se busca proteger a un grupo poblacional que en vigencia de una norma había satisfecho los requisitos para dejar causado un derecho en caso de ser declarado inválido, pero que esa norma fue luego derogada, variando las condiciones de acceso a una prestación cuando está aún no se había causado, es natural que durante un periodo de tiempo se le respete esa expectativa legítima, pero no se estima que tal situación de protección deba mantenerse de forma indefinida, puesto que la persona tiene oportunidad de conocer el cambio que se ha producido, para de esta manera adoptar las medidas para permitir que ante cualquier circunstancia se pueda causar un derecho, lo cual es predicable frente al demandante, en la medida que el cambio en las condiciones de acceso a la pensión se producen desde la Ley 100 de 1993, mientras que la invalidez tiene lugar luego de más de 15 años.

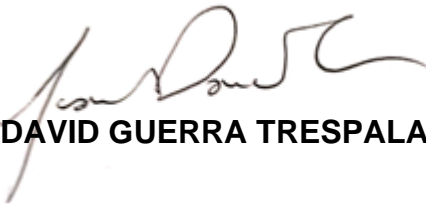
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el actor no reunía las condiciones de cotización exigidas por la jurisprudencia anteriormente citada, pues el siniestro no se produjo entre el 26 de diciembre de 2003 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 860), y el mismo día y mes del año 2006, como lo adocrinó la jurisprudencia especializada, dado que la invalidez se estructuró el 24 de noviembre de 2009. En consecuencia, es claro que no satisfacía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en aplicación de la Ley 100 de 1993, por condición más beneficiosa y norma más favorable.

Por tanto, era improcedente entonces declarar el reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida por el demandante ya que según los preceptos normativos y jurisprudenciales expuestos, la condición más beneficiosa remite a la Ley 100 de 1993, norma anterior a la que se encontraba en vigencia a la fecha de estructuración como ya se expuso, no al Decreto 758 de 1990, toda vez que no se trata de escoger la norma a la que se acomoden las pretensiones del actor, sino que en principio, se aplica la norma vigente, conforme a los principios del derecho procesal, la seguridad jurídica y la inescindibilidad de la normas y la aplicación del precedente jurisprudencial del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral como es la Corte Suprema de Justicia.

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-018-2021-00341-01
Radicado Interno 320-23

Bajo lo expresado en líneas precedentes, se advierte la razón por la cual consideró que no resultaba posible conceder la prestación pensional, siendo este el fundamento por el cual me aparto de la decisión mayoritaria.

Fecha *ut supra*.



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MIGUEL ÁNGEL VANEGAS VANEGAS
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-018-2021-00341-01
RADICADO INTERNO	: 320-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 05 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 05 de diciembre de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO